

3A
QUEJA: [REDACTED]

MATERIA: ADMINISTRATIVA.

RECURRENTE:
[REDACTED]

PONENTE:

MAGDO. MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS.

SECRETARIA:

LIC. ELSA BERENICE VIDRIO WEISKE.

Monterrey, Nuevo León. Acuerdo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente al día trece de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver, el recurso de queja [REDACTED] del índice de este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito; y,

RESULTANDO

PRIMERO. [REDACTED]

[REDACTED] por conducto de su abogado autorizado [REDACTED], mediante escrito que presentó el once de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, interpuso recurso de queja acorde con lo previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, contra el auto de tres de octubre del mismo año, por el cual le desechó la ampliación de la demanda.

SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer del medio de defensa de que se trata a este Tribunal Colegiado de

Circuito, cuyo presidente por proveído de nueve de febrero de dos mil dieciocho lo admitió a trámite integrándose para ese efecto el actual recurso de queja [REDACTED]

TERCERO. Se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja treinta y dos), quien no formuló pedimento.

CUARTO. Por auto veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó el turno de los presentes autos al magistrado Miguel Ángel Cantú Cisneros, para los efectos de elaboración de proyecto de resolución respectivo; luego, se listó y para una mejor intelección del proyecto se agregaron para su circulación, copias del auto recurrido así como de los agravios.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso "e", 98 y 99 de la Ley de Amparo; y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 47/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de once de julio de dos mil tres, puesto que se endereza contra un auto emitido por un juez de Distrito especializado por razón de la materia, comprendido en la propia circunscripción territorial, en el que se desechó una ampliación de demanda.

SEGUNDO. Auto recurrido. En lo que interesa, se tiene que el a quo agregó a los autos del juicio, para sus efectos legales correspondientes, el escrito firmado por el abogado autorizado de la parte quejosa, a través del cual ampliaron la demanda de amparo,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

QUEJA

MA A-55

señalando como nuevos actos reclamados *"la reparación integral de los daños por las autoridades por la violación a los derechos humanos, la indemnización de los daños materiales e inmateriales y la imposición de medidas de carácter disuasorio."*

Enseguida, precisó que de conformidad con lo establecido en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu, no ha lugar a proveer de conformidad con lo solicitado por el representante legal de los quejosos respecto de la ampliación de demanda; toda vez que, si bien era cierto, la ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica a que tienen derecho los peticionarios de garantías, también lo era que resultaba que ésta debía sujetarse a determinados requisitos de procedencia; esto es, que se trate de nuevos actos y nuevas autoridades, que no se haya integrado la litis y que los nuevos actos y autoridades tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ello se advierta que fueron otras las autoridades que llevaron a cabo los actos reclamados, pero debía existir siempre una relación con los actos primigenios.

Luego, señaló que en el escrito de cuenta dicho profesionista manifestó que los actos por los cuales acudía en representación de los quejosos a ampliar la demanda de amparo, eran consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos señalados en la demanda original y ampliaciones.

De manera que, si bien era cierto, que era posible la ampliación de demanda de garantías, tratándose de autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados, pero que tuvieran vinculación directa con ellos; que también lo era, que en el caso en estudio no se cumplieran con las hipótesis antes citadas, pues los impetrantes de amparo pretendían ampliar la demanda respecto a las consecuencias de los actos reclamados de manera primigenia; por tanto, resultaba improcedente dicha ampliación.

Además, ya tenían conocimiento desde que ejercieron la

acción constitucional, pues el daño por el cual pretendían reclamar la reparación integral se originó desde aquél tiempo; de ahí que lo anterior, en su caso, sería materia de análisis al resolver el fondo del asunto, pues en ese momento se analizarían y valorarían todas y cada una de las pruebas que hayan sido rendidas para tal efecto.

Citó en apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE."

TERCERO. La parte recurrente expresó como agravios, en síntesis los siguientes:

En su **único agravio** (identificado como primero) el recurrente manifiesta que le causa agravio el auto recurrido en el cual el juez de Distrito soslaya su deber de aplicación y reparación a que se refiere el artículo 63.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y decreta la improcedencia de la ampliación de la demanda.

Arguye que de manera incorrecta el a quo estima la improcedencia de la ampliación de la demanda, respecto a la reparación integral de los actos reclamados.

Sostiene que es irregular la desestimación de la ampliación de la demanda, por las siguientes razones.

A) Que se viola el principio de congruencia que rige las resoluciones en el juicio de garantía; ya que es incongruente y contradictoria, al manifestar que la reparación integral a lo que se refiere el artículo 63.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, será materia de análisis al resolverse el fondo del asunto; sin embargo, si debe hacer el estudio de fondo, no puede declarar la improcedencia.

Cita la jurisprudencia P./J. 135/2001, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE."



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

QUEJA

36
ORMA A-55

Asevera que no existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, si se requiere el estudio del fondo del asunto y valorar pruebas para determinar la solicitada reparación integral; por lo cual, afirma que no se actualiza la causa de improcedencia, que justifique el desechamiento de la acción constitucional, en la ampliación de demanda.

Asimismo señala que es en el momento de analizar la materia del juicio y del análisis de las pruebas, cuando se resuelve sobre la reparación integral, en términos del artículo 63 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

B) Que ante la transgresión de los derechos fundamentales, consagrados en el artículo 1 constitucional y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para subsanar la violación, procede compensar íntegramente los daños y perjuicios causados, manteniendo el estado de clausura por la inactividad y efectiva actuación de las autoridades responsables.

Manifiesta que ante la determinación del juez constitucional de declarar la conducta omisiva de las autoridades, como lesiva de los derechos humanos de la parte quejosa, es vinculante, obligatorio e ineludible, reparar las consecuencias generadas, así como realizar el pago de una justa indemnización a quien hubiese sufrido la lesión.

Menciona también, que es insoslayable que el resolutor, al resolver el fondo, debe atender la reparación integral de los derechos humanos, en términos del artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de ahí la irregularidad de la resolución impugnada.

C) Que el resolutor declara la improcedencia de la acción constitucional, aduciendo que se tiene conocimiento de los actos reclamados desde la demanda primigenia, desestimando que la acción constitucional, se endereza sobre actos negativos u omisivos, sobre los cuales el término para la interposición de la acción constitucional se actualiza momento a momento.

Refiere que no razona el juzgador la manera en que se tiene conocimiento, como llegó a la certeza de que se hizo sabedor el quejoso de los actos omisivos.

Por último señala que los actos omisivos, son de tracto sucesivo, por lo que, no se consuman en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término, por lo que es procedente la acción respecto de la reparación integral, sin que opere causa de improcedencia.

CUARTO. Estudio. El agravio hecho valer por la parte quejosa es *inoperante*.

Ello es así, en parte, **por basar sus argumentos en premisas incorrectas**, y en otra, porque **no combate los razonamientos expuestos por el juez de Distrito en el acuerdo recurrido**.

Para dar soporte a lo anterior, en principio, debe precisarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que la inoperancia de los agravios, se materializa cuando surge un impedimento técnico que imposibilita el examen del argumento hecho valer, y tiene su origen en alguna de las siguientes causas:

a) Falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte.

b) Omisión de la expresión de argumentos referidos a la cuestión debatida.

c) **Formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que pueden darse: al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis; y, en caso de reclamar infracción a las normas**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

QUEJA

FORMA A-55

fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia.

d) En su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado.

Las explicaciones anteriores tienen su origen en el criterio jurisprudencial 188/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente:

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUÉLLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; **de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse:** a) **al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia;** b) **al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo;** y, c) **en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia;** o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto

planteado.¹ (Lo destacado es por parte del Tribunal.)

Ahora bien, según se adelantó, los planteamientos expuestos en **los aparatados identificados como “A)” y “C)”**, resultan **inoperantes**, pues la recurrente parte de una premisa inexacta en su formulación.

Ello es así, en tanto en el acuerdo que se revisa, el juez de Distrito determinó que resultaba improcedente la ampliación de demanda presentada, al considerar que en el caso no se cumplieron los requisitos para la procedencia de la citada figura jurídica, ya que la “reparación integral” que se pretende reclamar, es una consecuencia de los actos reclamados inicialmente, de manera que desde que los quejosos ejercieron la acción constitucional, tenían conocimiento de ello.

Empero, **la impetrante parte de la premisa errónea de que el juez de Distrito desechó la ampliación de demanda por advertir la actualización manifiesta e indudable de una causa de improcedencia.**

Así es, en sus argumentos, la parte recurrente sostiene que (en el inciso “A”) la resolución impugnada es incongruente ya que el a quo manifiesta que la reparación integral que se pretendía reclamar sería materia del fondo del asunto, sin embargo, estima la inconforme, que no se actualiza causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable si involucra el estudio de fondo, por lo que *“se extingue a sí mismo el argumento de la causa de improcedencia”* expuesta por el juez de Distrito. Y que, (en el inciso “C”) *“es procedente la acción, respecto de la reparación integral [...] sin que opere causal de improcedencia”*, pues estima que el a quo pasa por alto que la acción constitucional se endereza sobre actos

¹ Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 424.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

QUEJA

ORMA A-55

negativos u omisivos, sobre los cuales el término para la interposición de la misma se actualiza de momento a momento, por lo que respecto de esta clase de actos, no corre términos.

De manera que, es patente que la recurrente pretende combatir el acuerdo contra el que se inconforma, al sostener que no se actualizó respecto de la ampliación que presentó, causa manifiesta e indudable de improcedencia, tanto por involucrar una cuestión de fondo, como porque respecto de los actos reclamados, no corre término para la presentación de la demanda (sic.). Mientras que, se reitera, el a quo resolvió, substancialmente, que no se actualizó alguna de las hipótesis de procedencia de la ampliación de demanda (previstas en el artículo 111 de la Ley de Amparo), mas no que respecto de lo reclamado en tal ampliación, se actualizara alguna causa de improcedencia (previstas en el diverso 61 de la propia ley), como lo refiere la impetrante.

Por ende, los motivos de inconformidad referidos no pueden prosperar para el propósito que dicen les asiste, como lo es controvertir los motivos y fundamentos del juez de Distrito para emitir la determinación recurrida.

Es aplicable por analogía la tesis de este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto:

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS INCORRECTAS. Los agravios son inoperantes cuando parten de una hipótesis que resulta incorrecta o falsa, y sustentan su argumento en ella, ya que en tal evento resulta inoficioso su examen por el tribunal revisor, pues aun de ser fundado el argumento, en un aspecto meramente jurídico sostenido con base en la premisa incorrecta, a ningún fin práctico se llegaría con su análisis y calificación, debido a que al partir aquél de una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; como en el caso en que se alegue que la Sala Fiscal determinó que la resolución administrativa era ilegal por encontrarse indebidamente motivada, para luego expresar

argumentos encaminados a evidenciar que al tratarse de un vicio formal dentro del proceso de fiscalización se debió declarar la nulidad para efectos y no lisa y llana al tenor de los numerales que al respecto se citen, y del examen a las constancias de autos se aprecia que la responsable no declaró la nulidad de la resolución administrativa sustentándose en el vicio de formalidad mencionado (indebida motivación), sino con base en una cuestión de fondo, lo que ocasiona que resulte innecesario deliberar sobre la legalidad de la nulidad absoluta decretada, al sustentarse tal argumento de ilegalidad en una premisa que no resultó verdadera.²

Por su parte, el argumento contenido en el apartado identificado como “B)”, **igualmente resulta inoperante, pues la recurrente no combate lo resuelto por el a quo** con lo que ahí expone, al referir que el juez de Distrito, al resolver el fondo del amparo, deberá atender a la reparación integral de los derechos humanos, como consecuencia necesaria de la declaración de la violación a éstos, por lo que no puede desechar la acción contenida en la ampliación de demanda; antes bien, con ello apoya la determinación que recurre.

En efecto, la circunstancia que alude la parte quejosa, relativa a que la reparación integral del daño es una consecuencia necesaria de la declaración que llegue a emitirse en el juicio de amparo sobre la existencia de una violación de derechos humanos, no controvierte la determinación total del a quo para desechar la ampliación de demanda, que se insiste, consistió en que su juicio, no se actualizó alguna de las hipótesis para la procedencia de tal figura jurídica.

Por el contrario, otorga soporte a la consideración del resolutor, en el sentido de que la reclamada reparación integral, en su caso, será materia de análisis al resolverse el fondo del asunto, por lo cual —como motivo adicional— determinó que la ampliación presentada resulta improcedente.

En ese tenor, el planteamiento referido tampoco no prospera

² Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, página 1769.



para el propósito de controvertir los motivos y fundamentos en los que el a quo basó el acuerdo recurrido.

Merced a lo cual, lo **conducente es confirmar** el fallo que se revisa, por el cual se decretó **que la ampliación a la demanda de amparo, formulada mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil diecisiete, resulta improcedente.**

Y por tanto, **lo que se impone en derecho es declarar infundado el recurso de queja.**

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Es **INFUNDADO** el recurso de queja interpuesto por

[REDACTED]
[REDACTED] en contra del auto dictado por el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, el tres de octubre del dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo radicado con el número [REDACTED]

Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos relativos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito que integran los señores magistrados **Miguel Ángel Cantú Cisneros, Jorge Meza Pérez y Sergio Eduardo Alvarado Puente**, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados; el magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente manifiesta que aunque está de acuerdo con el sentido del proyecto, está en contra de las consideraciones que rigen el mismo y formulará voto. Firman los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, en unión del

secretario de acuerdos licenciado Marco Antonio Arroyo Torres, que autoriza y da fe, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley de Amparo.

Voto particular que formula el magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente, en el recurso de queja

[REDACTED]

“Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, pero no con las consideraciones que lo sostienen, ya que en mi apreciación los agravios del recurrente no son inoperantes por lo que se expresa en el estudio de la mayoría.

En efecto, estimo que, en principio, debe reconocerse la omisión que se atribuye al juez de Distrito, en el sentido de que no se pronunció de forma congruente respecto de la reparación integral que fue materia de la ampliación de la demanda, lo cual serviría para calificar de fundada una parte del agravio, pero, a pesar de lo anterior, se llegaría a la conclusión de inoperancia porque hay coincidencia con lo que determina el propio juzgador en cuanto a que la reparación del daño que alegó el accionante, en todo caso será materia del fallo que se dicte en el fondo del asunto.

Es decir, el proyecto de la mayoría califica de inoperante el agravio porque el quejoso señaló que se le desechó la ampliación de demanda y, efectivamente, el juez no dijo que se desechaba el escrito de mérito, pero tampoco dijo en lo específico que se admitía, sino que determinó que era improcedente la ampliación; lo cual se tradujo para el quejoso, al no ver satisfecha su pretensión, que el juicio no se siguiera respecto del acto materia de su



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

QUEJA

AA-55

ampliación, lo que en realidad considero como un desechamiento, lo que no es ilógico entenderlo así por el quejoso, ya que si no hay un conocimiento de los actos que él está pretendiendo plantear en su ampliación o una declaración previa respecto a esos actos para que el juez se pronuncie en forma destacada cuando vaya a resolver el fondo, es claro que semánticamente hubo un desechamiento.

En este sentido, considero que el argumento del recurrente no es inoperante, sino que es importante hacer esta precisión de que es fundado en cuanto a que el juez de Distrito aunque declaró improcedente la ampliación de la demanda, no determinó en específico si se iba a examinar dicho acto de manera destacada y por ello el quejoso lo interpreta adecuadamente como un desechamiento; de ahí que el agravio resulte fundado.

En lo que sí coincido de calificar el agravio de inoperante es por el hecho de que el propio juez de Distrito establece que este acto será materia de fondo y, al hacerlo así, el propio juzgador está señalando que el acto reclamado ya se comprende en el escrito inicial de demanda y, además, necesariamente se va a ocupar de ello en el momento procesal oportuno.

Es de importancia atender el planteamiento que se formula en este caso en el sentido de declarar parcialmente fundado el agravio, porque lo que pretende el quejoso es establecer como un acto nuevo la reparación integral de los daños que, aparentemente, se le ocasionan con el acto reclamado y, por su parte, el juez de Distrito ya señaló que esto será materia de lo que en su caso se

resuelva en el fondo. Por tanto, estimo que en este aspecto debe reconocerse que el juez está considerando dicha reparación integral como un acto reclamado o destacado desde el principio de la demanda y que necesariamente se habrá de pronunciar al dictar la sentencia de fondo, que finalmente es lo que le interesa al quejoso al formular este recurso de queja.

De ahí que, coincidiendo parcialmente con lo señalado por el juez de Distrito en cuanto a que la reparación del daño será materia del estudio de fondo, implica que dicho acto ya ha sido, al menos en los términos generales formulados en su pronunciamiento, reconocido como un acto destacado o un acto reclamado desde el inicio en la demanda y que necesariamente será materia de análisis al fallarse el asunto conforme lo establecen los artículos 73, 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo.

La cita y precisión del contenido de sus efectos resulta de gran importancia porque, en términos de lo que establece la Ley de la Materia, si se llegara a conceder el amparo, el efecto será retrotraer las cosas al estado que se encontraban, restituyendo plenamente al quejoso en el goce del derecho vulnerado y aquí es donde debe decirse, desde mi punto de vista, que está implícito decidir sobre la reparación integral, que es lo que pretende el quejoso señalar como un distinto acto, pero claro está, siempre y cuando durante la acción constitucional se pruebe que efectivamente existió un daño, porque, al estar acreditado en el procedimiento dicho extremo y que se generó por virtud del acto reclamado, entonces necesariamente se comprendería la reparación integral que se alega. Por tanto, de esa manera se daría plena satisfacción al



gobernado en la reparación que pretende obtener si llegara a otorgarse el amparo.

Consideración que es acorde con los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación al deber del Estado de reparar de forma integral las violaciones a los derechos fundamentales, en términos de lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención Americana; lo cual puede advertirse en los párrafos 63 a 65, de la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil trece, en el "*Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs Estados Unidos Mexicanos*, apartado VII, *Reparaciones*", donde esencialmente determinó que la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las indemnizaciones compensatorias, la obligación de investigar, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados.

Asimismo, tiene aplicación a lo expuesto, la tesis dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, de Mayo de 2017, Tomo I, página 474, cuyo rubro y texto son:

"REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. POSIBILIDAD DE ESTABLECER MEDIDAS DE SATISFACCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE AMPARO. Existen algunas medidas que pueden reinterpretarse para darle cabida a las medidas no pecuniarias de reparación en el marco de la Ley de Amparo, lo cual contribuye a consolidar la concepción del juicio de amparo como un auténtico mecanismo de protección de los derechos humanos, aunque sin dejar de lado la necesidad de considerarlo en conjunto con medios

regulados con ese fin. En este sentido, las sentencias estimatorias de amparo constituyen en sí mismas una medida de satisfacción, pues al declarar la existencia de una violación a derechos humanos, las sentencias operan como una declaratoria oficial que contribuye a restaurar la dignidad de las personas. Así, más allá de las medidas de restitución contenidas en ellas, las sentencias de amparo tienen un valor fundamental como parte del proceso reparador de las consecuencias de un hecho victimizante, a tal punto que, en la gran mayoría de los casos, las medidas restitutorias, junto con la declaratoria en cuestión, son suficientes para reparar integralmente las violaciones a derechos humanos. Por otro lado, en casos en que la violación a derechos humanos pueda ser constitutiva de algún delito, la vista que están obligados a dar los jueces de amparo a las autoridades competentes para que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables, también debe verse como una medida de satisfacción. En efecto, esta Primera Sala considera que cuando, en el marco de un juicio de amparo, los jueces y tribunales adviertan la posible actualización de hechos constitutivos de delitos, existe una obligación de dar vista oficiosamente a las autoridades competentes de dicha situación, de forma que éstas se encuentren en condiciones de iniciar las investigaciones correspondientes para aclarar la verdad de los hechos y, en su caso, castigar a los responsables. Finalmente, esta Primera Sala considera que cuando se acuda al incidente de cumplimiento sustituto y se opte por realizar un "convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional", las partes pueden pactar reparaciones que no sean compensaciones económicas, como medidas de satisfacción, y los jueces de amparo pueden autorizarlas, siempre y cuando las autoridades responsables puedan obligarse a ello de acuerdo con el marco jurídico que establezca sus atribuciones y las citadas medidas de satisfacción no contravengan principios de orden público."

Desde otro aspecto, declarar fundado el agravio, pero inoperante al coincidir con el juez de Distrito en cuanto a que esto es materia de fondo, dejaría satisfecha la pretensión del quejoso en la medida que el propio juez ya reconoció que el acto materia de ampliación necesariamente será analizado como un acto específico al momento de resolver sobre su demanda.

Incluso, esa conclusión es congruente con lo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

QUEJA

AA A-55

establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuando el legislador señala qué hacer respecto a las normas generales, en donde claramente sí le da un efecto de amplitud en relación con los amparos que se conceden al quejoso para restituirlo por todos los daños o perjuicios que pudiera haber producido el acto reclamado.

En suma, estimo que el agravio es fundado en cuanto a que el juez de Distrito, si bien declara improcedente la ampliación de la demanda, lo cierto es que, el que no la admita o haya dicho que es improcedente y luego mencione que este acto será materia de fondo, refleja en realidad una contradicción inmersa en el propio acuerdo recurrido, que debe ser aclarada por el Tribunal estableciendo que el acto materia de la ampliación sí está considerado como tal desde el auto inicial y que su análisis será materia de fondo.

No obstante, se debe declarar la inoperancia precisamente porque estoy de acuerdo con la apreciación del juzgador en cuanto a que los efectos reparadores de la sentencia o la reparación integral que se pretende, necesariamente debe examinarse al momento de dictar la sentencia de fondo. De ahí que coincida respecto al sentido pero no con las consideraciones de declarar totalmente inoperante el agravio.

En la inteligencia de que todo lo anterior no es ajeno a la litis planteada, pues todo lo aquí expuesto deriva del planteamiento hecho por el juez de Distrito en relación con la ampliación de demanda que formuló el quejoso y que le fue declarada improcedente; esto es, no se trata de una consideración o de un análisis que no esté específicamente planteado, como se aceptó en la discusión

del proyecto aprobado por la mayoría."

AQUÍ TERMINA VOTO PARTICULAR.


MAGISTRADO PRESIDENTE Y PONENTE.

MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS.

MAGISTRADO DE CIRCUITO.


JORGE MEZA PÉREZ.

MAGISTRADO DE CIRCUITO.


SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE.

SECRETARIO DE ACUERDOS.


MARCO ANTONIO ARROYO TORRES.

El licenciado Marco Antonio Arroyo Torres, secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, CERTIFICA que esta foja corresponde a la parte final de la ejecutoria pronunciada el día trece de septiembre de dos mil dieciocho, en el queja [REDACTED] Conste.


Cotejó: Lic. Elsa Berenice Vidrio Weiske.
Mdm.

El Secretario de Acuerdos hace constar
que el presente asunto judicial se firmó
en 27 SEP 2018 16:00
adiciones 911 reformas. Conste.

Lic. Marco Antonio Arroyo Torres

En 27 SEP 2018 siendo las 14:00 horas,
se recibieron en la Secretaría de Acuerdos, los autos
y la sentencia anterior, que fue aprobada en Sesión
de este Tribunal Colegiado, de fecha 13 SEP 2018 y
se pasan al C. Actuario para su notificación. Doy fe.

Lic. Marco Antonio Arroyo Torres

En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas,
del día 27 de septiembre de 2018, se entregó a las partes, por
el C. Actuario, los autos que figuran en los estrados del Tribunal
Colegiado de San Salvador, de Amparo, Doy fe.

Lic. Ernesto de León Herrera
Actuario

En la ciudad de San Salvador, a las once horas,
del día 27 de septiembre de 2018, se entregó a las partes, por
el C. Actuario, los autos que figuran en los estrados del Tribunal
Colegiado de San Salvador, de Amparo. Doy fe.

Lic. Ernesto de León Herrera
Actuario

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Q-47-18-SEGUNDO.pdf
Secuencia: 2365416

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a una copia certificada.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	Marco Antonio Arroyo Torres	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	AOTM750124HDFRRR02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66000000000000000000000000000000763b	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	08/01/2019T20:52:11Z / 08/01/2019T14:52:11-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	8f 28 96 4b 48 69 92 90 c3 e3 26 df 87 39 ca f7 ef a7 e9 b8 58 62 20 93 31 f9 3d bf 99 a3 71 ac 00 82 68 50 09 de 77 2f 24 7c 13 5a cb 94 fb 02 0e 6f ca e5 74 af e7 22 c1 d0 26 c5 75 74 60 4d 85 d1 89 86 26 28 24 f3 c5 6c 11 d4 23 84 66 c3 d2 a3 79 e8 29 17 4d 43 6a 8c 56 27 2b 76 21 8e a0 15 f2 da e2 0c 4c b7 5c d5 02 55 c5 55 ac 46 ae da 3f a4 8d c3 7f c4 6f 67 1b 11 01 b5 9e 21 51 2f bb a1 30 e1 d6 7a 46 04 14 0a 1b 68 37 dc 34 d1 73 e3 5e 5b 74 0e 23 c2 1d dc 12 8f f3 c5 d3 1e bd 72 0a 9d 1d 50 37 d3 4b cc 84 4a 5a 2a 58 a4 fe 13 67 44 4e 1b 9e 77 0b 68 84 3c ff 60 c2 dc e3 4e 77 51 5b ac 38 bd b7 13 e1 bd ac 08 99 24 70 0d 93 28 d8 22 7e 87 2f 62 41 42 f6 c3 9b a7 9b 9e 37 95 fd c1 bc 3b aa 57 4d 0f 6a 20 90 7a 5e c4 68 3c a6 50 c7 d7 1a dd f6 3f c1 b1			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	08/01/2019T20:50:31Z / 08/01/2019T14:50:31-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66000000000000000000000000000000763b			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	08/01/2019T20:52:11Z / 08/01/2019T14:52:11-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2368538			
	Datos estampillados:	EB12A0624792698FED5B2F4769782176F63994EC			